

Segunda Parte

JUVENTUD, EDUCACIÓN Y EMPLEO

Jóvenes y ciudadanía en los modelos de sociedad emergentes en América Latina

Victor E. Tokman *

La pretensión de esta ponencia es profundizar en aquellos planteos con los cuales, en julio del año pasado, en Buenos Aires, culminamos nuestra intervención en la *VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud*. Quisiera reiniciar la discusión sobre lo que sucede en América Latina, una vez que constatamos que los ajustes han terminado.

¿Qué pasa con los latinoamericanos y qué pasa con la juventud en particular? Obviamente no hay respuestas finales. Gran parte de la región todavía está enfrentando ajustes que, aparentemente, no son transitorios sino que se están transformando en permanentes; son muy pocos los países que se exceptúan de esa realidad y hoy cuentan con niveles de ingreso mayores de los que tenían al comienzo de la época del ajuste. Quisiera aportar tres temas al debate: i) analizar qué está ocurriendo con el post-ajuste y verificar qué lecciones extraemos de esa situación; ii) intentar una exploración sobre qué tipo de modelo emerge y nos organiza como sociedad y en el cual los jóvenes deben participar; y, iii) establecer, finalmente, un marco de referencia para la discusión de las políticas sin profundizar en ellas, pues serán tema del posterior debate.

¿Qué pasa en el post-ajuste en la región?

Dos temas claves se plantean al respecto: uno es que los empleos que se están generando son de muy baja calidad; y el otro que nos pre-

* Subdirector General de la OIT y Director Regional para las Américas. Ponencia presentada en la inauguración del *Encuentro Internacional sobre Juventud, Educación y Empleo*, organizado por la Organización Iberoamericana de la Juventud (Río de Janeiro, Brasil, 8-12 de julio de 1997).

ocupa es la evolución de la pobreza y, particularmente, la evolución de la equidad.

Considero pertinente señalar que no se trata de que en América Latina no se están creando empleos. Con muy pocas excepciones, no se produjeron incrementos substanciales en la tasa de desempleo. Sólo que se trata de la creación de puestos de trabajo que no satisfacen, porque no dan protección, porque no generan los ingresos suficientes y porque no ofrecen perspectivas de desarrollo, para los jóvenes en particular, pero también para los trabajadores que ya están incorporados. Ocho de cada diez nuevos empleos que se han generado en los últimos diecisiete años en América Latina son de carácter informal. El empleo público no sólo ha dejado de ser fuente de absorción, sino que se advierte una importante contracción en niveles absolutos en los últimos años; y, por cierto, las grandes empresas –que son las que tienen que sustituir al sector público en la creación de empleos– han demostrado ser, en medio de un proceso de ajuste y cambio tecnológico, bastante lentas para generar los nuevos puestos que se necesitan.

La situación varía en cada país. Los que primero hicieron la reforma lograron aumentar más el empleo; los que los siguieron, la gran mayoría, están mostrando tener mayores problemas para alcanzar niveles de empleo suficientes. Junto con el ajuste llegó la flexibilización de los mercados de trabajo, y hemos visto crecer a cifras muy elevadas los empleos con contratos precarios y bajo distintas formas de contratos atípicos. Ello, en definitiva, significa que los trabajadores están sujetos a despido fácil y carecen de protección. El año pasado, en Argentina, los contratos atípicos pasaron del 3 al 13 por ciento del total de los contratos, y significaron el 85 por ciento de los nuevos contratos. En Perú, más del 50 por ciento de ellos hoy se hacen bajo formas temporales y de subcontratación de servicios.

El otro problema que, con respecto al post-ajuste, nos inquieta es que en los años noventa hemos visto que los programas en marcha, están produciendo una ligera reducción de la pobreza, pero en casi todos los países, con excepción de Uruguay, la equidad sigue sin mejorar. El caso de Chile, por ejemplo. País paradigmático en el éxito, ha crecido durante diez años de manera sostenida a tasas aceleradas, la pobreza se ha reducido del 38 al 24 por ciento, la inflación ha sido decreciente, el desempleo se ha mantenido bajo y, en disminución, ha crecido el empleo en actividades modernas y los salarios reales han aumentado junto con el gasto social. Sin embargo, la historia nos dice que la razón de los

ingresos entre el 20 por ciento más alto y el 20 por ciento más bajo de la población se mantiene en doce a uno, que la participación del estrato bajo es del 4 por ciento y la del alto es del 56 por ciento.

Comparemos este caso con el resto del mundo y, especialmente, con países del sudeste asiático, como Malasia o Indonesia, que también han tenido un recorrido concomitante con el que está ocurriendo en nuestra región y en países como Chile: rápido crecimiento, control de la inflación y disminución de la pobreza. En Malasia, la pobreza disminuyó del 49 al 17 por ciento entre 1970 y 1990; sin embargo, las diferencias de ingresos entre el 20 por ciento más alto y el 20 por ciento más bajo cayó de 17 a 12. En Indonesia, la pobreza se redujo del 39 al 16 por ciento, pero también fue acompañado por una disminución en las diferencias de ingreso de 7,5 a 5 veces. ¿A qué se debe esto?

Otra comparación que me parece pertinente es con los Estados Unidos, país con el cual en esta región tenemos, sin duda, diferencias substanciales pero que es fuente de inspiración para nuestros cambios institucionales y reformas. Sorprendentemente, los pobres de los Estados Unidos participan en el ingreso en la misma forma que en Chile: de manera constante entre el 4 y el 5 por ciento del producto. Sin embargo, cuando se mira el 20 por ciento más alto de la población de los Estados Unidos, la participación es del 40 por ciento, mientras que en Chile es del 56 por ciento. Si queremos encontrar una participación de esa magnitud en la historia de los Estados Unidos, debemos situarnos en los días previos a la crisis de los años treinta. Esto parece sugerir que la región entra a un capitalismo del siglo XXI con una distribución de ingreso de pre-guerra.

Quedaba, por último, la expectativa de que la desigualdad disminuiría con el crecimiento; que, después de un período de costo social necesario para facilitar la acumulación, los países se desarrollarían y se provocaría un aumento de la equidad. Así ocurrió en países desarrollados, en Inglaterra y en toda Europa, pero no en los Estados Unidos donde este proceso se ha interrumpido. Las cifras más recientes para ese país muestran que, desde fines de los sesenta, se registró una concentración de ingresos. Las cifras de Inglaterra muestran que, a partir de fines de los setenta, también hubo una concentración de ingresos. Incluso Suecia, país paradigmático del modelo social-demócrata, también muestra un aumento en la concentración de ingreso a partir de 1988. Con esto parece emerger un nuevo patrón mundial de acumulación donde, en el proceso de reforma, América Latina se salta la etapa intermedia. Al igual

que lo visto en los Estados Unidos, lo que hoy se observa en la región es que entramos en el siglo XXI sin haber pasado por las mejoras a que se llegó en el siglo XX, en términos de equidad.

Los factores explicativos, que a nuestro juicio importa analizar, tienen que ver con el tema que ocupa esta reunión: el acceso diferenciado a los buenos empleos y a la educación. Aun en países como Chile, donde la calidad y los niveles son mejores y no se deterioran, existe un acceso diferenciado, tanto a los empleos como a la educación. Entre 1992 y 1994, el 40 por ciento más bajo de la población de ese país vio aumentar su empleo, pero las tasas de incremento del empleo informal fueron, para esos estratos, mayores al 20 por ciento. Sin embargo, hubo un deterioro en los nuevos empleos formales. El 20 por ciento más alto de la población tiene un comportamiento exactamente al revés. Disminuyen las ocupaciones que llamamos informales y se expande muy fuertemente, en un 14 por ciento, el acceso a los trabajos más calificados. En el 40 por ciento más bajo aumenta en 30 por ciento los puestos que no requieren educación primaria; y en 11 por ciento los que exigen educación secundaria y técnica. El 20 por ciento más alto ve expandir muy rápidamente los puestos que requieren formación universitaria y profesional. Más del 50 por ciento de los nuevos puestos generados que requieren esos niveles de enseñanza van en definitiva al 20 por ciento más alto de la población. Esto, a su vez, se relaciona con el acceso diferenciado a la educación.

El analfabetismo, que en el caso de Chile es de alrededor del 4 por ciento, oculta que los grupos más pobres tienen una tasa de analfabetismo que es el doble de los grupos más pudientes. La participación en la escuela es más baja en el primero de esos grupos. El 85 por ciento de los menores de cinco años no está en la escuela. Si esto se compara con niños de la misma edad que provienen de hogares más ricos, vemos que ese porcentaje es del 62 por ciento. Las diferencias aumentan cuando observamos la educación secundaria; en este caso, hay siete veces más niños de familias pobres fuera del sistema que niños de la misma edad provenientes de hogares más pudientes. Esto también se refuerza con las diferencias de calidad que muestra la educación, diferencias que tienen que ver con sistemas que coexisten entre lo privado, lo público y lo subsidiado. Hoy, afortunadamente, se ha progresado en cuanto a contar con una evaluación de resultados que indica con claridad que –también en la mayoría de los casos– en países donde hay una gran segmentación en la oferta educativa, donde hay más recursos, se registran también mejores resultados.

Las últimas investigaciones muestran que la inversión en capital humano es quizás el factor más importante, tanto en el acceso como en la distribución, para determinar el resultado en términos de equidad. América Latina tiene, en general, cinco años y medio de escolaridad promedio; estamos cuatro años atrasados respecto del sudeste asiático y dos con respecto a países de igual nivel de desarrollo. Un tercio de la desigualdad lo explica este atraso en la escolaridad; pero, otro tercio lo explica la desigual distribución que existe en el acceso a la educación. Un año adicional de educación que podamos introducir significa un progreso substancial de reducción de dos puntos en los índices de concentración.

¿Por qué preocuparnos por situaciones donde la pobreza disminuye y la equidad no? Creo que, contra lo que se postulaba, en cuanto a que la desigualdad favorece al crecimiento, hoy tenemos como novedad que, si bien el crecimiento es una condición indispensable para disminuir la pobreza, no sabemos el resultado que tiene sobre la equidad y sabemos que mayor equidad significa mayor crecimiento. Ello porque se amplían los mercados, porque se disminuyen las imperfecciones, particularmente en el mercado de capital, porque se reduce la necesidad de subsidios a los que tienen menos y porque se aseguran los derechos de propiedad y la estabilidad en las reglas de juego.

Por otro lado, en esta región y en general en el mundo, pobreza y equidad no son independientes. El ritmo de progreso en la reducción de la pobreza depende de la capacidad de transferir recursos entre los distintos grupos sociales; cuanto más inequitativa sea la distribución, más recursos necesitamos para combatir la pobreza y menos se logra extraer a aquellos que concentran mayor proporción del ingreso. Sin duda, los pobres están excluidos de muchas cosas, incluso del consumo, pero no de las comunicaciones. Eso hace que las posibilidades de desarrollo de las aspiraciones, en una sociedad donde las comunicaciones avanzan rápidamente, los integre al menos en soñar, aunque deban enfrentar la dura realidad de que no pueden compartir los beneficios de ese aumento del consumo global.

El modelo de sociedad emergente en América Latina

Los dos pilares básicos del viejo modelo eran el pleno empleo y la solidaridad sistémica. El objetivo del pleno empleo permitía esperar que toda la población iba a ser incorporada al empleo y así iba a tener posibilidades de ascender en el mercado de trabajo. La solidaridad sisté-

mica, a su vez, permitiría corregir los desbalances que generaba la actividad productiva, asegurando la protección laboral y social por medio de lo que fue configurado como el “Estado de Bienestar”.

Sin duda, en América Latina nunca se llegó a cumplir plenamente el modelo postulado; sobrevivimos aun antes del ajuste con un alto contingente de pobreza y con una gran proporción de la población marginada. Pero las bases de la operación del modelo estaban allí, había búsqueda de pleno empleo y había institucionalidad orientada a generar solidaridad desde el punto de vista del sistema.

¿Que ha ocurrido en estas dos últimas décadas? El objetivo del pleno empleo, de hecho, ha sido abandonado. En muchos países se planteó una alta prioridad política por estabilizar la economía, en muchos casos justificada, porque en la región se registraron récords de inflación, con la cual es imposible sobrevivir. Aparecieron también los cambios tecnológicos que han permitido crecer sin requerir más empleo e incluso, en muchos casos, sin requerir más capital. Un tema que no sólo preocupa hoy a América Latina, sino a todo el mundo. Atraviesa el orbe una discusión sobre si se acabó la posibilidad de generar empleos o si los empleos como estaban concebidos, terminaron y entramos en una nueva era de ocupaciones que todavía no conocemos.

La solidaridad sistémica ha sido cuestionada también por muchos motivos. Por el predominio de los objetivos económicos sobre los sociales, por la protección de las ganancias, lo que se hace necesario en un modelo que descansa en la inversión que hagan los empresarios privados. Porque en épocas de ajuste nos preocupan los déficit fiscales; cuando hay que reducir el gasto, resulta más fácil centrar la puntería en los subsidios y las transferencias. Por último, porque hemos avanzado en el manejo de la política de gasto social, focalizando se ha aumentado la eficiencia económica; pero uno de los resultados derivados del aumento de la eficacia económica es que se ha perdido eficacia social mediante pérdidas de equidad. Es indudable que la mejor focalización del gasto social no ha sido a expensas de los grupos de más altos ingresos sino, fundamentalmente, trasladando ingresos de los grupos medios a los grupos más bajos.

Por otra parte, se verifican cambios de comportamiento. Hemos pasado en forma creciente a un mundo donde la acción individual está sobreponiéndose a la acción colectiva, tanto porque vivimos en un mundo mucho más competitivo, internacional e internamente, como porque

en las empresas ocurrieron cambios en el proceso tecnológico. Hemos pasado de la producción en masa a una producción más individualizada; las formas de protección, que antes eran sistémicas y distributivas, hoy se han trasladado a la familia, focalizándose mucho más la acción del Estado en los grupos en situación de extrema pobreza.

La búsqueda de cohesión social y solidaridad sistémica que inspiraba el modelo se producía, además, en un contexto de vínculos sociales y valores integradores que, desafortunadamente, hoy también enfrentan un cuestionamiento creciente. El modelo también se basaba en el concepto de Estado Nación y en el ideario democrático. El concepto de Nación nos permite buscar la solidaridad a través de los símbolos nacionales. A su vez, el ideario democrático es el mejor sistema que existe para introducir consistencia negociada entre las libertades individuales y la organización común de la sociedad. En relación con el Estado Nación, tenemos dos tensiones. La primera es la transnacionalización y la globalización que nos está llevando fundamentalmente a consideraciones extra-país, extra-nación y extra-Estado. Eso ocurre en algunas zonas de un modo más avanzado que en otras, pero es un fenómeno que se presenta en todas partes. La otra tensión es la de asociarse a pertenencias geográficas más reducidas, donde no sólo se desdibuja el Estado Nación, sino que cobran mayor importancia las comunidades locales y la descentralización. En algunos países, por ejemplo, donde cayeron las viejas repúblicas, quizás existían divisiones artificiales mantenidas durante algún tiempo. Pero lo normal es asociar el concepto de Estado Nación con el poder central estatal y, por lo tanto, no es casualidad que hoy se esté enfatizando tanto en la participación autónoma de la sociedad civil y en la descentralización.

El ideario democrático ha probado ser también de aceptación difícil: hay problemas de representación, problemas de distancia entre los gobernantes y gobernados, problemas de corrupción, un desafecto creciente de los ciudadanos con los sistemas políticos y, sin duda, existe una dificultad muy grande para instalar regímenes democráticos en sociedades con altas dosis de dualismo. No hay que engañarse, no hay sustituto para la democracia; lo que está en juego es la capacidad de cada persona –joven o vieja, pero particularmente joven– de conducirse como un verdadero ciudadano. Ese es el desafío mayor que nos planteamos para las políticas globales y para la juventud en el futuro: recomponer la ciudadanía.

Este desafío que, como decía, es general, se aplica particularmente a los jóvenes porque son los más afectados por la falta de inserción eco-

nómica (el desempleo juvenil duplica la tasa general), porque tienen la inserción más precaria (el 54 por ciento de los jóvenes que están en el mercado de trabajo lo hacen en las ocupaciones informales) y un acceso diferenciado a las oportunidades de educación. Esto, en definitiva, hace que en forma creciente el problema de la juventud en América Latina sea el de una juventud marginal y, por lo tanto, excluida del potencial de crecimiento y desarrollo. Peor aún, es una juventud que ha perdido la confianza en sí misma y el interés en participar en la sociedad. Alain Touraine relata que un joven poblador le dijo: "... *ni mi padre me quiere*". Esta cita es dramática: alguien a quien no quiere ni valoriza siquiera su propia familia. Las encuestas de años atrás en Chile traían como respuesta que el joven "*no estaba ni ahí*" con el gobierno en momentos en que Chile salía de una larga dictadura militar y donde lo que se necesitaba era el compromiso con la democracia. La pregunta es: ¿qué hacer para romper este círculo vicioso?

¿Cómo se promueve la ciudadanía?

En su dimensión económica, pasa por el restablecimiento de la prioridad en el empleo. En este sentido hemos avanzado políticamente. La Cumbre Social de Copenhague registró los compromisos políticos de todos los países del mundo por volver al pleno empleo. Podrán decir los escépticos: "*declaraciones se hacen todos los días, pero, ¿cómo?*". Sin duda, es cierto; pero también hay que reconocer que el abandono de la práctica comienza por el abandono de los objetivos y si se procede así, ya ni siquiera tenemos que justificar por qué no estamos buscando los instrumentos.

Debe reconocerse, en segundo lugar, que se produjeron cambios muy importantes y que no se trata de adoptar aires de nostalgia y pensar que hay que volver atrás para empezar de nuevo, añorando el tiempo pasado que, como se dice, siempre fue mejor. Por el contrario, no hay expectativas de obtener un crecimiento acelerado del empleo en sectores modernos, con estabilidad, con alta protección. Deben incorporarse nuevas formas de empleo que la evolución económica ha ido legitimando como perfectamente aceptables y que no tienen por qué no ser consideradas dentro del concepto de pleno empleo.

Se reconoce que hay que aumentar el empleo en general, pero en particular para los jóvenes y yo creo que ahí también hubo avances. Habría que profundizar en la forma de intervenir mejor para resolver los problemas que afectan específicamente como grupo a los jóvenes,

particularmente a aquellos que no han tenido la posibilidad de educarse, de adaptarse, y que tienen insuficiencias de capacitación para acceder al primer empleo.

Tiene que quedar claro que cualquier empleo no va a satisfacer el objetivo de volver al pleno empleo. Hay un problema de calidad, y cuando en América Latina hablamos de calidad estamos hablando de informalidad, de ocupaciones que se desarrollan a muy pequeña escala o de manera individual, que dan ingresos muy bajos, no tienen protección alguna y cuentan con pocas perspectivas ocupacionales. Por eso, ésta es una de las tareas: cómo intervenir para hacer que las ocupaciones informales sean ocupaciones de calidad.

Tenemos en la región una experiencia creciente en programas de apoyo a microempresarios; programas de crédito, de capacitación, de comercialización. No es ese el objetivo de mi reflexión, sino más bien pensar de qué modo nos aproximamos a estas realidades desde el punto de vista de la regulación. La actividad informal sólo tiene futuro en la medida en que facilite la incorporación plena a la actividad principal del país. Ese será, quizás, el principal incentivo que tienen quienes están en esas ocupaciones: hacer el esfuerzo por incorporarse al resto del sistema. Actualmente se considera que quien no tuvo el privilegio de conseguir un buen empleo es un infractor, porque es un violador de las leyes, porque no paga impuestos, porque no respeta la legislación laboral, porque no sigue las reglas del juego.

En el mejor de los casos, lo que tenemos son políticas para ignorarlos y, en el peor, políticas para reprimirlos. Creemos que hay que cambiar el énfasis, que debemos pensar más creativamente sobre el modo de formalizar. Esto quiere decir, comenzar a habilitar los derechos de la gente para que pueda cumplir con las obligaciones.

A modo de ejemplo, en el campo tributario, siempre que en América Latina se necesitan recursos públicos se trata de ampliar la base tributaria persiguiendo a los informales. Son campañas que han demostrado ser muy ineficientes desde el punto de vista de la rentabilidad. En Perú, durante la última campaña, al final, por cada sol recaudado, se gastaron 85 centavos en fiscalización, lo que es muy poco rentable, sin contar el clima confrontacional que genera con la población de menores recursos.

Aprendimos, además, en este período, que el efecto más importante que tiene el registro tributario es la obligación de llevar registros de

contabilidad, aunque sean precarios. A su vez, los registros de contabilidad son la base para hacer negocios, y hacer negocios es un requisito indispensable para que la ocupación generada a pequeña escala tenga alguna posibilidad de producir ingresos mejores.

En lo laboral, entre el 80 y el 85 por ciento de los contratos de trabajo en microempresas son verbales. Sin embargo, los sistemas promocionales de contratación exigen el contrato escrito y registrado, con lo cual no hay ninguna posibilidad de que, quien trabaja en este tipo de actividad, sea sujeto de protección. Pero tampoco existe la posibilidad de que los microempresarios piensen en hacer negocios de la manera en que ellos se hacen; debe empezar por pensar que no está en una actividad familiar y que su rentabilidad no es sólo por trabajar sin límites de horario, ni por no estar organizado, sino que debe entrar a otra forma de hacer negocios.

Existe, por último, la necesidad de avanzar en la titularización de los activos que disponen los pobres. Estos no pueden ser titularizados si se mantiene un procedimiento que los trata como si fueran activos de gran escala y si no se ofrece una alternativa de legalización e inscripción. La titularización es otro de los instrumentos importantes para abrir el acceso al mercado de capital. Con ello se avanza en la búsqueda de la ciudadanía económica; esto es, el ejercicio de los derechos para que se pueda cumplir con las obligaciones. Sólo es ciudadano pleno, desde el punto de vista económico, aquel que junto con tener sus derechos, está en condiciones de cumplir con sus obligaciones.

Finalmente, habrá que recomponer la solidaridad sistémica y rediseñar la política de protección, que no puede limitarse a la política anti-pobreza. Cabe, al respecto, efectuar dos consideraciones. La primera es ampliar las oportunidades para todos y, particularmente, en la educación. La segunda es reabrir espacios públicos de calidad. Vilmar Farias, distinguido sociólogo brasileño, ha planteado la necesidad de disminuir la segmentación que se está creando en las sociedades post-ajuste, donde se han generado polos autocontenidos que se polarizan entre ricos y pobres. Los grupos medios, principales perdedores en el ajuste, han tendido a incorporarse a los pobres, más que como era tradición, a servir de factor de homogeneización social o, a veces, los más exitosos, a integrar los grupos más altos. La sociedad se ha hecho más compartimentada, se han perdido oportunidades de intercambiar experiencias entre personas de distinto origen, provenientes de distintas posiciones sociales. Frente a esto, se propone generar espacios públicos de calidad. No necesariamente espacios estatales, pero sí espa-

cios abiertos no sólo en el campo de la educación sino también en el cultural, en el deportivo, en el de la coexistencia y de la cohabitación diaria de los habitantes de un país.

Por último, se postula fortalecer la capacidad de los jóvenes de comportarse como actores sociales para que sean capaces de modificar el entorno social para realizar proyectos nacionales. Este es un aspecto que plantea con mucho énfasis Alain Touraine¹. Asimismo, en el reciente informe sobre educación de la comisión presidida por Jacques Delors, se vuelve a plantear el mismo tema.

¿Cómo, entonces, fortalecer a los jóvenes como actores sociales, capaces de modificar el entorno para realizar proyectos nacionales? Como dice Touraine, se requiere transformar los sueños en proyectos realizables. Esto quiere decir, restituir la seguridad y la confianza (la Comisión Delors² pone énfasis en descubrirse a sí mismo). No hay que olvidar que aquel que tiene una historia de fracaso dentro de su núcleo familiar y que no funciona como los demás, en un momento dado comienza a dudar sobre su propia capacidad y tiende a la autoculpabilidad. Existen ahí tareas para los educadores, para la familia y para el trabajo.

Una segunda vía es incrementar la capacidad para comunicarse con los demás. En palabras de la Comisión Delors: descubrir al Otro. Esto requiere del lenguaje, del manejo de la información y, también, de aprender de la diversidad. En esto no hay casualidad: la gente pensante de esta región también está transitando los caminos de la comunicación entre distintos grupos, con distintas vivencias, para aprender unos de otros. Acá hay un papel, por cierto, para la escuela; pero también para las políticas públicas y para el gobierno.

La tercera vía es promover en los jóvenes conciencia de ciudadanía, el conocimiento del espacio y la historia; pero también ganar la percepción de que ellos importan y de que sus opiniones influyen en las discusiones sobre la vida colectiva. Acá hay un papel mayor para el sistema político y para el gobierno.

De lo que se trata en definitiva, como señala Alain Touraine, es de reconstruir individualmente a los jóvenes marginados, darles una mayor capacidad para elaborar proyectos, situarse con respecto a los demás y sentirse miembros de la comunidad. Cómo salir de esta dicotomía entre la inconformidad y la anomia es, quizás, la tarea más importante que tienen las políticas de juventud en nuestra región.

¹ Touraine, Alain. *Juventud y democracia en Chile: dos imágenes de la juventud*. Revista Iberoamericana de la Juventud N° 1 (OIJ, Madrid, julio de 1996).

² *La educación encierra un tesoro*. Comisión Delors (Madrid, 1997).

